

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA
Bogotá D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Medida de Protección No. 060-2020

Radicado 2020-0158

A continuación, procede el despacho a desatar el recurso de apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, en concordancia con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, previo las siguientes,

ANTECEDENTES

La señora SANDRA MARINA HURTADO ÁLVAREZ acudió a la Comisaría Octava de Familia de esta ciudad, poniendo en conocimiento los hechos de violencia psicológica del que es víctima por parte de JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ PRADA.

Instruidas las diligencias, mediante providencia de fecha 24 de febrero de 2020, la Comisaria de conocimiento ordenó medida de protección a favor de SANDRA MARINA HURTADO ÁLVAREZ contra JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ PRADA.

Frente a la anterior decisión el accionado interpuso recurso de apelación manifestando que no se tuvo en cuenta los hechos de violencia que sufrió, y de los cuales hay pruebas que no fueron valorados.

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

CONSIDERACIONES

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 Ibídem prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *“golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”¹¹*; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Descendiendo al caso tenemos que el denunciante sostiene ha sido maltratado psicológicamente por parte de su ex compañero JESÚS ANTONIO

RODRÍGUEZ PRADA, hechos que al ser puestos en su conocimiento fueron aceptados.

El motivo de inconformidad del apelante está dado por que él también fue víctima de violencia física por parte de la accionante y no se investigó.

Sea lo primero decir que la argumentación desplegada en el asunto materia del presente pronunciamiento frente al maltrato psicológico del que fue víctima la señora SANDRA MARINA HURTADO ÁLVAREZ, se compadece con la realidad probatoria que registra el expediente, pues no solamente está la declaración del querellante, sino la declaración de la señora SANDRA MARINA HURTADO ÁLVAREZ, al señalar que efectivamente ha sufrido amenazas de muerte y agresiones verbales, por parte del señor JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ PRADA, hecho que fue aceptado, con la cual sin lugar a dudas, permite tener por acreditado los hechos expuestos por el quejoso, como lo hizo la comisaria A quo, quien tomó las pruebas en su conjunto, determinando la situación de maltrato psicológico que padeció SANDRA MARINA HURTADO ÁLVAREZ.

El material probatorio permite demostrar la responsabilidad del accionado ya que el hecho de proferir amenazas de muerte y agresiones verbales, son actos de violencia intrafamiliar, que fueron determinadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos relacionados por la víctima.

Ahora bien, es preciso resaltar que si el accionado considera que la querellante lo agredió físicamente, no puede, so pretexto de defender sus derechos, acudir a las vías de hecho y hacer justicia por su propia mano, pues para esos están constituidas las autoridades a quienes por ley les corresponde investigar y sancionar las conducta contrarias a la ley y que en virtud de ello pueden adoptar las medidas preventivas que consideren necesarias para cada caso en concreto.

Puestas así las cosas para el despacho es claro sin lugar a dudas existió agresión proferida por el señor JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ PRADA a SANDRA MARINA HURTADO ÁLVAREZ, permite a este despacho considerar

asertivo lo dispuesto por la comisaria de conocimiento en la decisión que fuera objeto de recurso, más cuando el solo hecho de proporcionar maltrato constituye ya una desproporción respecto de la forma de solucionar conflictos.

Finalmente, respecto de los señalamientos sobre las agresiones que dice haber sufrido el accionado, el despacho la invita a que efectúe las denuncias respectivas, para que las autoridades judiciales y administrativas investiguen los hechos que expone.

Con base en lo expuesto, el Juzgado concluye que debe confirmar en todas sus partes la resolución de fecha 24 de febrero de 2020 proferida por la Comisaría Octava de Familia de esta ciudad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la providencia del 24 de febrero de 2020 proferida por la Comisaría Octava de Familia de esta ciudad.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen previa anotación de los libros radicadores.

NOTIFÍQUESE,

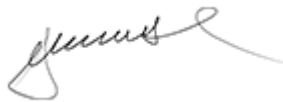


CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

Estado 58

02-09-2020



TOMAS OLAYA GONZALEZ

secretario

[\[1\] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html](http://www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html)